

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 149.

Dirección de Gobierno.
Negociado 3.º—Quintas.

Disponiendo se proceda á las operaciones de la quinta, excepto el juicio de excepciones.

Por el Ministerio de la Gobernación se me dice en Real orden de 22 del mes último lo que sigue:

La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar que cuide V. S. de que en todos los pueblos de esa provincia se ejecuten en el tiempo y forma que previene la ley de quintas vigente, la rectificación del alistamiento y el sorteo para el reemplazo del ejército activo, correspondiente al año actual, suspendiendo las demás operaciones de la quinta hasta nueva orden.

De la de S. M. lo digo á V. S. para los efectos consiguientes.

Lo que se inserta en el Boletín para su debida publicidad y exacto cumplimiento, encargando á los Ayuntamientos que concierden por ahora las operaciones de la quinta para el reemplazo ordinario del corriente año al alistamiento y sorteo, absteniéndose

hasta nueva orden de proceder al juicio de excepciones y demás operaciones, según así se dispone en la preinserta Real orden. Orense 3 de marzo de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

CIRCULAR NUM. 150.

Dirección de Beneficencia y Sanidad.
Negociado 2.º

Admitiendo la cesion que hace D. Alejandro Olivan del 10 por 100 del producto del *Manual de Agricultura y Cartilla agraria* á favor de la Beneficencia.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en 4 del actual me dice lo que sigue:

El Sr. Ministro de Fomento con fecha 30 de diciembre próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.—Excmo. Sr.: La Reina (que Dios guarde) se ha servido aceptar la cesion que ha hecho el Excmo. Sr. Don Alejandro Olivan del 10 por 100 del producto de la venta de sus libros titulados: *Manual de Agricultura y Cartilla Agraria* en favor de los establecimientos provinciales de Beneficencia; y á fin de que esto se lleve á efecto, ha mandado al propio tiempo que los depositarios de los fondos de provincia se encarguen de dichas obras para hacer su reparto á los Alcaldes, y en su caso á los maestros según las listas formadas por las Juntas de Instrucción pública; y luego que cobraren su importe, entreguen el 10 por 100 á la de Beneficencia respectiva, entendiéndose con el expresado autor por el resto.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Y de la propia Real orden lo traslado á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público y demás efectos Orense 2 de marzo de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

TERCERA SECCION.

Número 151.

En la Gaceta de Madrid número 31 del jueves 3 de febrero último se publica lo siguiente:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 29 de enero de 1859, en los autos de competencia entre el Juzgado de Marina del distrito de Sevilla y el de primera instancia del distrito de San Roman de dicha ciudad, acerca del conocimiento de una demanda deducida por don José Perez contra don Manuel Caballero Infante sobre pago de 1,350 rs.

Resultando que en la indicada demanda, deducida en 13 de julio último en el referido juzgado civil ordinario, despues de expresar Perez que habia contratado con Caballero Infante la construccion de unas cancelas para cierta casa de la propiedad de este, y que habiéndolas hecho y estando ya colocadas, si bien se le habia satisfecho parte del valor de las mismas, se le debia aun y no podia conseguir se le pagase el resto de dicho valor que era la expresada cantidad de los 1,350 rs., terminó pidiendo en lo principal que se condenase á Caballero Infante al pago de esta, y por un otrosi que, previa la correspondiente justificación, se le defendiese en clase de pobre.

Resultando que conferido traslado sobre el otrosi con reserva de proveer á su tiempo sobre lo principal, acudió Caballero Infante al expresado Juzgado de Marina, y sin haber usado de la declinatoria, dedujo la inhibitoria á fin de que se declarase competente para conocer de la demanda y oficiase al en que esta se habia propuesto para que se inhibiera de su conocimiento y remitiera las actuaciones, alegando para ello que era albacea y administrador de los bienes de la testamentaria de su padre político don Antonio Zuazo, extremos que se justificaron por medio de testimonio, habiendo contratado con Perez bajo tales conceptos la construccion de las cancelas destinadas á formar parte de una casa incluida entre los indicados bienes de la testamentaria aun pendiente, y de la que conocia aquel Juzgado de Marina por haber sido Zuazo Capitan de fragata, y que no era obstáculo á la pretension que deducia el no habersele conferido traslado mas que del punto de pobreza, ya porque de este incidente, según el art. 187 de la ley de Enjuiciamiento civil, no podia

conocer otro Juzgado que el que entendiase en lo principal, y ya porque cualquier acto del exponente que no condujera á la inhibicion se consideraria sumision tácita:

Resultando que, mediante la conformidad del Fiscal y del Juzgado de Marina con esta solicitud, se ofició al civil ordinario para que se inhibiese, en el que dado traslado á Perez, no se opuso este á la inhibicion para evitar dilaciones, si bien manifestó que al contratar con Caballero Infante no supo que lo verificaba con el albacea y administrador de la testamentaria:

Resultando que antes de emitir su dictamen el Promotor fiscal del Juzgado del distrito de San Roman creyó necesario que Perez se ratificara en el precedente escrito y manifestara en qué concepto demandaba á Caballero Infante, ratificación que tuvo efecto, expresando Perez al hacerla que demandaba á dicha Caballero Infante por su propia personalidad, pero que no sabia que este fuese albacea y administrador de la testamentaria, no habiéndole manifestado al contratar que tuviese tal representacion en los indicados conceptos, y habiendo él ejecutado su obra bajo el de que era para el mismo Caballero Infante:

Resultando que en vista de esto el Promotor fiscal sostuvo la jurisdiccion del Juzgado civil ordinario, exponiendo que, justa ó injustamente, la demanda se deducia contra Caballero Infante por una obligacion que no se derivaba de Zuazo, habiendo contratado el demandado por su propia personalidad: que si la accion se ejercitaba equivocada ó maliciosamente, el demandado podria usar de las excepciones legales, y acaso, debatidas estas, se haria competente la jurisdiccion de Marina, la cual entre tanto no lo era, y que si en el estado actual del negocio se declarase incompetente el Juzgado civil ordinario, se resolveria de hecho el fundamento del libelo contra lo que el demandante queria que fuese, y la resolucion seria sin discusion previa, prejuzgando la materia del litigio:

Resultando que el Juzgado del distrito de San Roman, fundado en lo manifestado por Perez y en lo expuesto por el Promotor, declaró no haber lugar á la inhibicion y dirigió el oportuno oficio al de Marina, en el que insistió Caballero Infante en que habia celebrado el contrato como administrador de la testamentaria, y que habia manifestado á Perez varias particularidades acerca de la casa de Zuazo y de estar pendiente la liquidacion de bienes de este, añadiendo que no insistia por su parte en la inhibicion del Juzgado civil ordinario:

Resultando, finalmente, que el Sr. Marina, apoyado en que Caballero Infante al contratar la construcción de las cancelas había obrado como mero a la instrucción de la testamentaria de Zuazo, se declaró incompetente y remitió sus actuaciones a este Tribunal Supremo, al que también remitió las suyas el civil ordinario.

Vistos; siendo Ponente el Ministro don José María Trillo:

Considerando que la obligación contraída por don Manuel Caballero Infante en favor de don José Pérez para retribuirle en su día el valor de las cancelas de que se trata, fué puramente personal del mismo Caballero Infante, sin relación alguna con la testamentaria que administra de su padre político don Antonio Zuazo, de quien también es albacea:

Considerando que esta calificación de la obligación de Caballero, no solo se funda en lo declarado por el actor, sino también en el allanamiento que el demandado prestó para que conociese del asunto el Juzgado ordinario, no obstante haber sostenido, sin probarlo en manera alguna, que Pérez se enteró de que la obra de que se habla encargado era para una casa perteneciente a la citada testamentaria:

Considerando, en fin, que á un cuando esto se hallase legalmente justificado, solo conduciría á probar la mútua confianza que mediaba en el uno para encargarse al otro de la obra, y en este para ejecutarla con el beneficio del emplazamiento para el pago, que tal vez no hubiera concedido á la testamentaria misma, en lo cual podían hallarse interesadas personas hasta desconocidas para él;

Fallamos, que el conocimiento de este asunto toca y corresponde al Juzgado de primera instancia del distrito de San Roman de la ciudad de Sevilla, al cual se remitan ambas piezas de autos para que ante él usen las partes de su derecho.

Así por esta nuestra sentencia, de la cual se saquen copias certificadas para su inserción en la *Gaceta de Madrid* y en la *Colección legislativa*, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Maria Fonsera.—Ramon Maria de Arriola.—Juan Maria Biec.—Felipe de Urbina.—José Maria de Trillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilmo. Sr. D. José Maria de Trillo, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy día de la fecha, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado.

Madrid 29 de enero de 1859.—Gregorio C. Garcia.

En la villa y corte de Madrid á 29 de enero de 1859, en los autos pendientes ante Nos por recurso de casación interpuesto por don José Maria Boom contra la sentencia dictada por la Sala primera de la Real Audiencia de Sevilla en la competencia entre el Tribunal de Comercio de Cadiz y el Juzgado de primera instancia del distrito de San Antonio de esta última ciudad acerca del conocimiento de los autos promovidos por don Andres Terry contra Boom en el referido Juzgado para la cobranza de un pagaré:

Resultando que en 13 de agosto de 1855 acordó el Banco de Cadiz al indico el Tribunal de Comercio, con escrito, al que acompañó tres pagarés, expresando que uno de ellos de 240,000 rs. había sido librado en 27 de marzo de 1855 á tres meses de su fecha por don Manuel Docavo á la orden de don José Maria Boom, de aquel comercio, y embolsado por éste al mismo Banco; y después de añadir que tanto dicho pagaré como los otros dos habían sido protestados por falta de pago á sus vencimientos, terminó pidiendo que reconociese Boom sus firmas puestas en ellos, y que si resultase su legitimidad, se despachase mandamiento de ejecución contra los bienes del mismo:

Resultando que después de varias diligencias se declaró en 22 de diciembre del mismo año no haber lugar á despachar la ejecución, providencia que no fué reclamada, habiéndose desglosado los pagarés de las actuaciones y hecho entrega de ellos al Procurador del Banco en 2 de julio de 1857:

Resultando que en 8 del mismo julio presentó Terry al referido Juzgado del distrito de San Antonio un pagaré librado en 27 de marzo de 1855 á tres meses de su fecha por don Manuel Docavo, á la orden de Boom, por 240,000 rs. en efectivo, valor recibido en la misma especie, endosado por Boom en 29 de mayo próximo siguiente al Banco, valor recibido del mismo, y endosado finalmente en 1.º de dicho julio de 1857 á Terry por el Banco, sin la responsabilidad de este Establecimiento, valor de dicho Terry; acompañando testimonio de haber sido protestado en 28 de junio de 1855, y manifestado don Ignacio Docavo, como socio de la casa de don Manuel del mismo apellido, en el acto del protesto, que no satisfacía la casa dichos pagarés por falta de fondos:

Resultando que al presentar Terry estos documentos, expuso que por haber quebrado la casa de Docavo había dirigido el Banco la acción contra el endosante, y que después dicho Establecimiento le había transferido la propiedad del pagaré, cuyo cobro no podía esperar si no recurria al embargo preventivo de los únicos bienes que se conocían á Boom, que eran unos títulos de la Deuda diferida; por lo cual solicitó dicho embargo, siendo estimada de cuenta, cargo y riesgo de Terry la intervención provisional de dichos títulos:

Resultando que sin demora presentó escrito Boom en las actuaciones ya referidas del Tribunal de Comercio de Cadiz para que oficiase de inhibición al Juzgado civil ordinario, apoyando esta solicitud en que á aquel correspondía el conocimiento del negocio, según los artículos 454 y 558 del Código de Comercio, por tratarse del cobro de pagaré procedente de operación mercantil, firmado y endosado por comerciantes; y en que el mismo pagaré había servido de título para provocar ante aquella jurisdicción mercantil un juicio aun pendiente ante la misma:

Resultando que el Tribunal de Comercio, por parecerle que el pagaré era uno de los tres sobre cuyo cobro se habían instruido diligencias ante el mismo y por lo demás alegado por Boom, acordó officiar, y en efecto offició, al Juzgado civil ordinario para que se inhibiese:

Resultando que en apoyo de la jurisdicción de este expusieron Terry y el Promotor fiscal: que el art. 454 del Código de Comercio que citaba Boom no era aplicable al caso actual: que el 558, que invocaba también, era contraproducentem, porque establecía que los pagarés á la orden que procedían de operaciones mercantiles producirían las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, de modo que no habiendo justificado Boom que concurriese esa condición precisa, no era el pagaré otra cosa que un contrato de préstamo sujeto á las leyes civiles y á la jurisdicción ordinaria con arreglo al art. 567 del mismo Código de Comercio: que según ese mismo artículo, para que el préstamo se tuviese por mercantil era preciso que estuviese justificado haberse contraído en el concepto y con expresión de destinarse lo prestado á actos de comercio, no resultando que Docavo y Boom fuesen comerciantes matriculados cuando celebraron el contrato, y finalmente, que el Tribunal de Comercio no afirmaba que el pagaré fuese el mismo que el nuevamente presentado ante el Juzgado civil ordinario: siendo por otra parte indistintamente que lo fuese ó no, puesto que si no

era más que un préstamo común, cuando se hubiese acordado acerca de él en la jurisdicción mercantil era nulo, por no ser esta prorrogable:

Resultando que sosteniendo el Juzgado civil ordinario, por estas razones, su jurisdicción se formalizó la competencia, y levadas las actuaciones respectivas por las Autoridades contendientes á la Real Audiencia expresada, recayó la sentencia indicada, decidiendo la competencia á favor de dicho Juzgado civil ordinario:

Resultando, finalmente, que en el recurso de casación interpuesto contra la precedente sentencia se alegó: que esta era contraria al art. 111 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no expresarse por qué no eran aplicables al caso actual los artículos 454 y 558 del Código de Comercio: que era incontestable que el pagaré presentado en el Juzgado del distrito de San Antonio era el mismo que antes lo había sido en el Tribunal de Comercio, y como este usaba de su derecho llamando á sí un documento sustraído á su jurisdicción, la decisión de la sentencia era contraria á esta doctrina legal: que según lo dispuesto en los artículos 157 y 158 de la ley de Enjuiciamiento civil, eran acumulables los autos del Juzgado civil ordinario á los del Tribunal de Comercio, debiéndose ajustar el negocio para la acumulación á los trámites de las competencias, según los artículos desde el 165 hasta el 174 de la misma ley de Enjuiciamiento civil: y la sentencia al decidir la cuestión jurisdiccional á favor de dicho Juzgado, había contravenido á las disposiciones de los mencionados artículos: que las personas que intervinieron en el pagaré eran comerciantes, y este se había expedido á la orden por valor recibido en efectivo, habiendo sido endosado al Banco con la misma expresión, de lo que resultaba que era un acto de comercio: siendo la acción que se ejercitaba la que nacia de él y no la que procedía del contrato entre Docavo y Boom, y mediante decidir la sentencia que se trataba de un contrato de puro préstamo, infringía los artículos 249 y 570 del Código de Comercio, y la doctrina legal que conforme á lo que se acaba de expresar establecen varios autores: que aunque no hubiese sido mercantil el negocio productivo del pagaré, puesto que se había endosado, era una venta mercantil calificada por las disposiciones de la sección 1.ª tit. 5.º libro 2.º del mismo Código de Comercio, y que se regía por los artículos que tratan de los endosos de las letras de cambio aplicables á las de los pagarés, según el ya citado art. 558: siendo por ello la decisión de la sentencia contraria á dichos artículos y al 1199; y que lo era también el 454, porque el comerciante Boom había endosado el pagaré, y según ese artículo, el endoso de un comerciante en letra que no procediese de operación mercantil se reputaba acto de comercio:

Vistos; siendo Ponente el Ministro don Felipe de Urbina:

Considerando que aun cuando el pagaré de que se trata fuese uno de los que se presentaron al Tribunal de Comercio por el Banco de Cadiz, solicitando se despachase ejecución contra los bienes del deudor, le fué denegada esta petición, quedando terminadas las actuaciones hasta el punto de desglosarse los pagarés y entregarse al Procurador del Banco:

Considerando que el pagaré presentado por Terry en el Juzgado del distrito de San Antonio no contiene indicación alguna por la que se comprenda procede de operación mercantil, porque en él solo se expresa es á la orden por 240,000 rs. vn. recibidos en efectivo y pagaderos á tres meses de su fecha:

Considerando que por el art. 587 del Código de Comercio se establece que para que los préstamos se tengan por mercantiles es necesario que se contraigan en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan á actos de

comercio y no para necesidades ajenas á este, y que faltando esta condición, se considerarán como préstamos comunes y se regirán por las leyes comunes:

Considerando que el art. 454 del Código de Comercio, que se supone infringido por la sentencia de la Sala primera, se refiere á los efectos que producen las letras de cambio entre personas no comerciantes, estableciendo se estimen como simples pagarés, sobre cuyos efectos los libradores ó aceptantes serán juzgados por las leyes comunes en los Tribunales de su fuero respectivo, y por las leyes de comercio cuando dichas personas no comerciantes hubieren librado ó aceptado las letras por consecuencia de una operación mercantil, y que por lo tanto no tiene aplicación este artículo á la actual controversia:

Considerando que el art. 558 del Código de Comercio, que también se dice infringido por dicha sentencia, estableciendo que los pagarés á la orden que procedan de operaciones de comercio producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio determina, como condición necesaria, que procedan de operaciones mercantiles, lo que no resulta del pagaré de que se trata:

Y considerando que, tanto el art. 570, como el 1.º 199 del Código de Comercio que se suponen infringidos, estriban sobre la base establecida por el 587, de que se contraían en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan á actos de comercio:

Fallamos, que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don José Maria Boom, á quien condenamos en las costas, devolviéndose á costa, también del mismo, los autos á la expresada Real Audiencia con la certificación que previene el art. 1.167 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Así por la presente sentencia, que se publicará en la *Gaceta de esta corte* é insertará en la *Colección legislativa*, pasándose al efecto las correspondientes copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Maria Fonsera.—Ramon Maria de Arriola.—Joaquin de Roncali.—Miguel de Najera Mencos.—Juan Maria Biec.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elio.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilmo. Sr. D. Felipe de Urbina, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy día de la fecha, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado.

Madrid 29 de enero de 1859.—Gregorio C. Garcia.

Lo que se inserta en este periódico oficial para su debida publicidad. Orense 4 de marzo de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

Número 132.

En la *Gaceta de Madrid* número 36 del sábado 5 de febrero último se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES DECRETOS.

Habiendo fallecido Don José Jimenez Serrano, Diputado á Cortes por el distrito de Alcalá la Real, provincia de Jaen, Vengo en mandar que se proceda á nueva elección en el mismo con arreglo á la ley de 18 de marzo de 1846 y su adicional de 16 de febrero de 1849.

Dado en Palacio á 3 de febrero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

Habiendo renunciado D. Manuel Moreno Lopez el cargo de Diputado a Cortes por el distrito de Constantina, provincia de Sevilla, Vengo en mandar que se proceda a nueva eleccion en el mismo con arreglo a la ley de 18 de marzo de 1816 y su adicional de 16 de febrero de 1819. Dado en Palacio a 3 de febrero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

Habiendo sido declarada nula por el Congreso de Diputados el acta de eleccion del distrito de Caldas de Reyes, provincia de Pontevedra, Vengo en mandar que se proceda a nueva eleccion de Diputado a Cortes en el mismo con arreglo a la ley de 18 de marzo de 1816 y su adicional de 16 de febrero de 1819. Dado en Palacio a 3 de febrero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

Habiendo optado por el distrito de Santander el Diputado a Cortes Don Joaquin Carras, elegido tambien por el de Puenteansa, en la misma provincia, Vengo en mandar que se proceda a nueva eleccion en este distrito con arreglo a la ley de 18 de marzo de 1816 y su adicional de 16 de febrero de 1819. Dado en Palacio a 3 de febrero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

Habiendo optado por el distrito de la Merced, de Málaga, el Diputado a Cortes D. Antonio Cánovas del Castillo, elegido tambien por Coin, en la misma provincia, Vengo en mandar que se proceda a nueva eleccion en este distrito con arreglo a la ley de 18 de marzo de 1816 y su adicional de 16 de febrero de 1819. Dado en Palacio a 3 de febrero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

Habiendo optado por el distrito de la Mota del Marques, provincia de Valladolid, el Diputado a Cortes Don Enrique O'Donnell, elegido tambien por el de Lucena, en la de Castellon, Vengo en mandar que se proceda a nueva eleccion en este distrito con arreglo a la ley de 18 de marzo de 1816 y su adicional de 16 de febrero de 1819. Dado en Palacio a 3 de febrero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

MINISTERIO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Para los efectos que fueren procedentes en el Ministerio del digno cargo de V. E., adjunta le remito de orden de S. M., comunicada por el señor Ministro de la Guerra y de Ultramar, copia de la sentencia dictada por la Sala de Indias del Tribunal Supremo de Justicia en los autos de la residencia tomada al Teniente general D. Manuel Crespo por el tiempo que desempeñó los cargos de Gobernador superior de las Islas Filipinas y Presidente de la Audiencia Chancillería de Manila. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de enero de 1859.—Augusto Ulloa.—Sr. Ministro de la Guerra.

Copia que se cita.

«En los autos de residencia tomada al Teniente general D. Manuel Crespo por

el tiempo que sirvió el empleo de Gobernador de las Islas Filipinas y la Presidencia de aquella Real Audiencia Chancillería, como igualmente a D. Ramon Montero, que desempeñó los mismos destinos durante el mal estado de salud del Don Manuel Crespo, y a sus Asesores y Secretario de Gobierno».

Visto la informacion secreta, cargos hechos al residenciado y sentencia dada por el Juez comisionado en 6 de julio de 1857, con lo expuesto en este Supremo Tribunal por el referido Crespo y por el Ministerio fiscal:

«Fallamos, que debemos absolver y absolvemos al Teniente general Don Manuel Crespo de los cargos que se le han hecho, declarando que como Gobernador y Presidente de la Real Audiencia Chancillería de las Islas Filipinas ha cumplido con lealtad sus deberes y obligaciones, sin perjuicio de que en lo sucesivo, en los asuntos de justicia y asuntos de gobierno, oiga a sus Asesores natos y al Real acuerdo respectivamente.

Absolvimos asimismo al segundo Cabo Don Ramon Montero que tambien ejerció el mando de aquellas Islas por el mal estado de salud del D. Manuel Crespo; al Secretario de Gobierno D. Juan Antonio Martinez, y a los Asesores D. Mariano Esartin, D. Meliton Balanzategui, Don José Maria Sanchez Puig, Don Valentin Solés, D. José Barbara Mato y Don José Perez y López, declarando de oficio las costas y gastos del juicio, en conformidad a lo dispuesto en el art. 3.º del Real decreto de 20 de noviembre de 1811.

Férnese expediente separado segun y para los fines que propone el Sr. Fiscal en el tercer otrosí de su dictámen de 7 de diciembre último, devolviéndose al Gobierno de S. M. los dos expedientes remitidos con Reales órdenes de 28 de abril de 1856 y 16 de marzo de 1857, para que en su vista se sirva acordar lo que estime mas conforme, poniendo al mismo tiempo en su conocimiento esta resolucion para los efectos convenientes.

En lo que con esta sentencia sea conforme la del Juez comisionado la confirmamos, y en lo que no, la revocamos, y lo acordado.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—José Gamarra y Cambronero.—Manuel Garcia de la Cotera.—Miguel de Nájera Menos.—Vicente Valor.—José Portilla.—Gabriel Ceruelo de Velasco.

Publicacion.—Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Hmo. Sr. Don Ramon Lopez Vazquez, Ministro del Supremo Tribunal de Justicia y Presidente de su Sala de Indias, de que yo el Secretario de S. M. y Escribano de Cámara certifico.

Madrid 17 de enero de 1859.—Pedro Sanchez de Ocaña.—Es copia de su original, a que me remito, de que certifico yo el Secretario de S. M. y Escribano de Cámara de la Sala de Indias del Supremo Tribunal de Justicia.

Y para que conste y remitir al Gobierno de S. M., pongo la presente en Madrid a 27 de enero de 1859.—Pedro Sanchez de Ocaña.—Hay un sello del Supremo Tribunal de Justicia.—Es copia.—El Director general, Ulloa».

CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía española Reina de las Españas: a todos los que las presentes vieren y entendieren, y a quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que He venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que pende en primera y única instancia ante el Consejo de Estado, entre partes, de la una D. Juan Benito

Riquelme, Oficial primero cesante de la Administracion de fincas del Estado de la provincia de Murcia, demandante, y de la otra la Administracion general del Estado, representada por mi Fiscal, demandada, sobre mejora de clasificacion.

Visto: Visto el expediente de clasificacion del interesado, en el cual se le reconocen por la Junta de Clases pasivas, hasta setiembre de 1851 que quedó cesante, 16 años, dos meses y cuatro dias de servicio; comprendiéndose en estos los concedidos por haber obtenido el diploma de la Cruz de Coliz, y con derecho a haber pasivo desde el 30 de mayo de 1856:

Visto que le fueron excluidos de la anterior clasificacion los años que sirvió como Oficial segundo de la Secretaria del Ayuntamiento de Lorca, nombrado por el suprimido Consejo de Castilla, y el de escribiente primero de la Contaduría de Rentas y Arbitrios de Murcia, nombrado por el Contador y aprobado por la Direccion general:

Vista la instancia de Riquelme dirigida al Ministerio de Hacienda, en la que reclamaba contra el acuerdo de la referida Junta, que le declaró con derecho a percibir su cesantía desde el 30 de mayo de 1856, y que se le abonara el tiempo que sirvió de escribiente primero de la Contaduría de Rentas de Murcia:

Visto el informe de la susodicha Junta, en que manifiesta haber declarado a Don Juan Benito Riquelme con derecho a haber pasivo desde que se publicó la ley de 30 de mayo de 1856, que concede e abono a los Milicianos Nacionales de 1821, en cuyos beneficios habia sido incluido; que la citada ley no merecia que desde aquella fecha debieran considerarse aquellos con opcion a percibir el sueldo de cesante, y que el abono del tiempo que sirvió como escribiente de la Contaduría de Murcia no era procedente, porque habia entrado a desempeñarlo con posterioridad a la Real orden de 11 de noviembre de 1833, perdiendo, segun lo dispuesto en ella, los derechos de empleado para los beneficios de clasificacion:

Vista la Real orden de 30 de junio de 1857, expedida de conformidad con el dictámen de la Asesoría de Hacienda, desestimando la peticion del recurrente y aprobando el mencionado acuerdo:

Visto el recurso interpuesto por Don Juan Benito Riquelme, en el que solicita quede sin efecto dicha Real orden, y que se le declaren abonables los años que sirvió de escribiente en la repetida Contaduría, ó se le abone desde que quedó cesante en 1851 el haber que se le ha señalado por la Junta solo desde 30 de mayo de 1856:

Visto el escrito de mi Fiscal, en el que pretende la confirmacion de la predicha Real orden:

Vista la ley de 30 de mayo de 1856 y la de presupuestos de 1855:

Visto el nombramiento de escribiente de la Contaduría de Arbitrios de Amortizacion de la provincia de Murcia, hecho por el Contador bajo el concepto de hallarse autorizado para ello por la Direccion general del ramo, y la comunicacion dirigida por el mismo a Riquelme, transcribiéndole otra de dicha Direccion al Contador, aprobando el nombramiento hecho por este de los cuatro escribientes comprendidos en la nota que acompañó al ponerle en conocimiento de aquella, con las asignaciones en la misma expresada, respecto a estimarlos necesarios:

Considerando que la plaza de escribiente que desempeña D. Juan Benito Riquelme en la Contaduría de Arbitrios de Amortizacion de Murcia no era de planta con sueldo fijo, como lo patentiza su nombramiento consultado por el Contador a la Direccion general del ramo, junto con la designacion de sueldo y del número de escribientes que estimó necesarios, no siendo de abono por esto a Riquelme el tiempo que sirvió dicha plaza:

Considerando que hasta el 30 de mayo

de 1856, fecha de la citada ley, en que Riquelme esta comprendido, y en cuya virtud le corresponden los años transcurridos desde el de 1823 hasta el de 1851, no adquirió derecho a haber de cesantía, y no puede tenerle en consecuencia al percibo de este haber sino desde esa misma fecha, que es cabalmente la señalada a este fin en la Real orden contra que reclama:

Oído el Consejo de Estado, en sesion a que asistieron D. Francisco Martinez de la Rosa, Presidente; D. Martin de los Heros, D. Domingo Ruiz de la Vega, Don Fernando Infante, D. Antonio Gonzalez, Don Andres Garcia Camba, el Conde de Colindres, D. Joaquin José Casaus, D. Manuel Quesada, D. Francisco Tames Heria, D. Antonio Fernandez Lirada, el Marques de Someruelos, D. Antonio Caballero, Don Manuel de Sierra y Moya, D. Francisco Luxan, Don José Antonio Ojabea, D. Antonio Escudero, D. Manuel Cantero, D. Diego Lopez Bailesteros, D. Luis Mayans, D. Pedro Gomez de la Serna, D. Florencio Rodriguez Vaamonde, Don Joaquin Francisco Pacheco, el Marques de Girona, D. Nicomedes Pastor Diaz, el Conde de Torre-Marin y Don Manuel de Guillamas y Galiano.

Vengo en desestimar la demanda de este interesado, y en confirmar la Real orden de 30 de junio de 1857.

Dado en Palacio a 6 de enero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

Publicacion.—Leido y publicado el anterior Real decreto por mí el Secretario general del Consejo de Estado, habiéndose celebrado audiencia pública el Consejo pleno, acordó que se tenga como resolucion final en la instancia y autos a que se refiere; que se una a los mismos; se notifique a las partes por cédula de Ujter, y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 15 de enero de 1859.—Juan Sunyé.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 7 de marzo de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guillan.

QUINTA SECCION.

Juzgado de 1.ª instancia de Lugo.

Don Manuel Gregorio Gimenez, jefe de administracion, secretario de S. M. y Auditor honorario de Marina y juez de Hacienda en propiedad de la provincia de Lugo.—Por el presente se cita, llama y emplaza a Benito Gid Fernandez, vecino de S. Juan de Villamarín distrito de Barceiros, para que en el término de treinta dias se presente en la pública de esta ciudad a sufrir la prision correccional en que ha sido penado, por via de sustitucion y apremio de la multa impuesta en la causa que se le formó por delito de contrabando; bajo apercibimiento que de no verificarlo le parara el perjuicio que haya lugar. Dado en Lugo a 19 de febrero de 1859.—Manuel Gregorio Gimenez.—Por mandado de S. S., Francisco Abuin y Torres.

En la extraccion de la loteria primitiva, celebrada en Madrid el dia 7 del actual, han salido agraciados los números siguientes:

58.=76.=61.=44.=38.

BAUTISMOS.

RESUMEN NUMÉRICO de los celebrados en esta provincia en el citado trimestre.

PARTIDOS.	HIJOS.						TOTAL de ambas clases.
	De legítimo matrim. ^o			Fuera de matrimonio			
	Varo-nes.	Hem-bras.	TOTAL.	Varo-nes.	Hem-bras.	TOTAL.	
Allariz..	118	92	210	9	6	15	225
Bande..	59	60	119	5	7	12	131
Carballino..	111	109	250	10	10	20	270
Celanova..	109	86	195	10	7	17	212
Ginzo..	121	87	211	7	10	17	228
Orense..	152	169	321	6	6	12	333
Ribadavia..	80	74	154	1	6	7	161
Trives..	81	57	138	5	5	10	148
Valdeorras..	59	51	110	2	6	8	118
Verin..	119	108	227	12	8	20	247
Viana..	60	24	84	11	10	21	105
TOTAL..	1,102	917	2,019	78	81	159	2,178

MATRIMONIOS.

RESUMEN NUMÉRICO de los celebrados en esta provincia en el primer trimestre de 1858.

PARTIDOS.	MATRIMONIOS DE				TOTAL.
	Soltero con		Viudo con		
	Soltera.	Viuda.	Soltera.	Viuda.	
Allariz..	53	2	8	4	67
Bande..	32	1	4	1	38
Carballino..	71	4	4	1	79
Celanova..	59	7	5	1	72
Ginzo..	32	2	8	2	44
Orense..	73	6	7	5	91
Ribadavia..	38	3	6	1	48
Trives..	34	2	1	4	40
Valdeorras..	23	1	6	1	30
Verin..	35	1	7	2	45
Viana..	37	2	6	1	45
TOTAL..	487	31	61	20	599

DEFUNCIONES.

ESTADO NUMÉRICO de las que han ocurrido durante el primer trimestre del año de 1858.

PARTIDOS.	Edades															TOTAL.....								
	De menos de un año.....	De 1 a 5....	De 5 a 10..	De 10 a 15.	De 15 a 20.	De 20 a 25.	De 25 a 30.	De 30 a 35.	De 35 a 40.	De 40 a 45.	De 45 a 50.	De 50 a 55.	De 55 a 60.	De 60 a 65.	De 65 a 70.		De 70 a 75.	De 75 a 80.	De 80 a 85.	De 85 a 90.	De 90 a 95.	De 95 a 100.	Hasta 110...	
Allariz..	15	10	5	1	3	7	7	6	8	10	4	7	9	23	17	19	10	4	1	1	1	1	1	167
Bande..	18	6	3	4	4	5	5	3	5	6	6	2	8	8	14	11	6	3	1	1	1	1	1	118
Carballino..	19	41	4	6	4	2	5	11	6	8	19	7	28	16	21	9	12	6	1	1	1	1	1	224
Celanova..	25	18	7	5	4	3	6	12	8	9	16	7	20	13	16	3	4	3	1	1	1	1	1	180
Ginzo..	17	20	4	3	2	4	5	4	4	5	6	21	9	25	10	16	5	6	1	1	1	1	1	167
Orense..	31	22	7	4	5	7	7	7	17	14	13	22	19	28	19	15	10	3	2	2	1	1	1	254
Ribadavia..	20	23	3	1	2	3	6	4	2	9	5	7	10	18	14	14	12	3	4	1	1	1	1	158
Trives..	5	11	4	3	3	4	4	2	4	6	9	6	4	10	10	10	7	3	1	1	1	1	1	107
Valdeorras..	12	7	3	2	4	2	6	4	6	4	8	6	15	6	7	6	1	1	1	1	1	1	1	100
Verin..	25	26	13	5	8	6	5	5	13	10	9	12	18	8	7	9	6	3	1	1	1	1	1	188
Viana..	10	3	3	2	5	2	3	3	5	3	4	12	5	14	9	7	9	1	2	1	1	1	1	100
TOTALES..	497	187	56	36	44	45	59	61	78	81	96	109	145	169	144	119	82	35	11	5	1	1	1	1,763

El mismo estado clasificado por condiciones sociales.

PARTIDOS.	Solteros.	Solteras.	Casados.	Casadas.	Viudos.	Viudas.	TOTAL.
Allariz..	35	33	33	27	14	25	167
Bande..	30	20	15	13	21	19	118
Carballino..	53	53	35	39	21	23	224
Celanova..	38	40	28	30	15	20	180
Ginzo..	50	38	35	15	8	20	167
Orense..	56	46	46	34	28	44	254
Ribadavia..	25	30	35	25	20	23	158
Trives..	23	25	15	17	9	18	107
Valdeorras..	26	21	18	17	9	9	100
Verin..	60	39	30	23	20	16	188
Viana..	20	22	14	19	11	14	100
TOTALES..	416	367	305	259	196	240	1,763